

MEMORIA RESUMEN PROYECTO CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE

*Guía para la inclusión de cláusulas sociales
y medioambientales en la contratación
pública de la Junta de Andalucía*



Junta de Andalucía
Consejería de Hacienda,
Industria y Energía
Dirección General de Patrimonio

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 1/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPXKDAGBNVXBH5LVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Índice

1	Datos básicos	3
2	Análisis de necesidades	4
3	Objetivos del proyecto	6
4	Previsión de resultados	7
5	Potencial aplicación de resultados del proyecto	8
6	Herramientas para evaluar los resultados del proyecto	9
7	Descripción del equipo de trabajo implicado en el proyecto	10
8	Presupuesto y plazo de ejecución	11

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 2/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPXKDAGBNVXBH5LVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Datos básicos

ORGANO PARTICIPANTE:	Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Patrimonio
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:	Contratación Pública Sostenible Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública de la Junta de Andalucía
OBJETIVO:	Potenciar la contratación pública sostenible en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales lo que supone un importante incentivo para que los operadores económicos orienten sus productos y servicios a la sostenibilidad medioambiental y social, alentando una industria respetuosa con el medio ambiente y con los derechos de la ciudadanía como personas y como trabajadores y trabajadoras.
PRESUPUESTO:	18.900 '00 €, IVA incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Tres meses, debiendo quedar finalizado en cualquier caso antes del 30 de diciembre de 2020.

Análisis de necesidades

Modelo de gestión de la contratación pública común

La Dirección General de Patrimonio es el órgano directivo al que le corresponden las competencias que atribuye la normativa a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía en materia relacionada con las políticas estratégicas de contratación pública.

A través del programa 6.1.G "Gestión y Administración del Patrimonio de la Comunidad Autónoma" se pretende acometer un proceso que dote a la Comunidad Autónoma de Andalucía de un **modelo de gestión de la contratación pública común**, que implemente la estrategia corporativa de contratación electrónica, se oriente a la consecución de mayores niveles de transparencia y competencia, facilite el acceso a las PYMES, potencie la calidad e innovación, avance en la centralización y racionalización de los contratos así como en la asignación adecuada de los recursos públicos y, entre otros, ponga en valor la contratación pública como herramienta estratégica, esto es, la gobernanza estratégica a través del desarrollo de políticas públicas en materia social, laboral y medioambiental.

Dentro de este objetivo estratégico se considera necesario avanzar en la normalización de los procesos contractuales, estableciendo criterios uniformes y homogéneos a tener en cuenta en la tramitación de los contratos por lo que una de las actuaciones previstas para el ejercicio presupuestario 2020 vinculadas al mismo es el dictar normas e instrucciones, en cuyo espectro se plantea el presente proyecto de contratación pública sostenible.

La asociación entre la promoción y tutela ambiental y social y la contratación pública conforma una de las dimensiones más importantes de la promoción de la sostenibilidad en el ámbito de la Unión Europea. Desde la perspectiva de la contratación pública, esta unión constituye uno de los pilares de la anteriormente mencionada contratación pública estratégica, que vincula la celebración, adjudicación y ejecución de los contratos públicos a la satisfacción de diferentes políticas públicas a nivel comunitario, estatal y autonómico.

La contratación pública sostenible, que es uno de los componentes de la contratación pública estratégica, es definida como la integración de aspectos sociales, como la promoción de la igualdad, laborales, éticos y ambientales en los procesos de contratación pública.

La contratación pública sostenible engloba, por tanto, la contratación pública ambiental y la contratación pública social. La contratación pública ambiental, también denominada contratación pública verde o ecológica, es una herramienta jurídica básica para introducir prácticas respetuosas con el medio ambiente en el ámbito contractual. Es un instrumento eficaz no sólo para reducir el impacto ambiental de determinadas actuaciones y proyectos, sino también para guiar la conducta de los operadores económicos hacia estándares de protección ambiental mediante nuevas formas de producción y consumo. Por su parte, la contratación pública social, necesariamente unidad a la anterior, sin que podamos tratar una sin la otra, puede definirse como aquella que integra las inquietudes sociales en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos con el objetivo de contrarrestar las desventajas sociales y laborales de determinados colectivos en situación o riesgo de exclusión social y contribuir a mejorar las condiciones laborales y sociales de la ciudadanía en general y de las mujeres en particular.

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 4/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPXKDAGBNVXBH5LVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

La contratación pública sostenible se incorpora a la normativa europea sobre contratación pública a partir de las Directivas de tercera generación y, en concreto, de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Esta será la primera vez que una norma comunitaria admita expresamente la posibilidad de integrar aspectos ambientales y sociales en la contratación pública. Las actuales Directivas de cuarta generación —y dentro de éstas, fundamentalmente la 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública— reproducen la regulación de la contratación pública sostenible existente en la Directiva de 2004, si bien desarrollando y completando sus previsiones.

En el ordenamiento jurídico español, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, traspuso al ordenamiento jurídico español las Directivas de tercera generación, incluyendo sus previsiones sobre contratación pública sostenible. Las Directivas de cuarta generación han sido incorporadas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por el recientemente aprobado Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

La principal novedad de la Ley 9/2017 reside en que transforma la contratación pública sostenible de voluntaria a obligatoria para los órganos de contratación. Su artículo 1.3, precepto de referencia en esta materia, establece que en toda contratación pública se incorporarán, de manera transversal y preceptiva, criterios sociales y ambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato. La nueva Ley de Contratos del Sector Público exige, por lo tanto, que los órganos de contratación incorporen obligatoriamente cláusulas medioambientales y sociales en todos los contratos que celebren con el sector privado, pero los gestores requieren de una guía de ayuda que facilite dicha incorporación.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2016, por el que se impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 203, de 21 de octubre), instó a la Consejería con competencia en materia de Hacienda a la aprobación de una guía para la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación de la Junta de Andalucía en las diferentes fases del procedimiento de contratación, al objeto de facilitar a los órganos de contratación la incorporación de estas cláusulas en los distintos documentos contractuales y de establecer cláusulas de obligado cumplimiento para todos los órganos de contratación, así como cláusulas recomendadas que éstos podrán adaptar o modular en cuanto a su redacción conforme a las características de cada contrato.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública—actual Consejería de Hacienda, Industria y Energía—elaboró en 2016 un documento titulado “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía” en el que se recogían las cláusulas que obligatoriamente debían incluirse en todos los pliegos de contratación de la Junta de Andalucía, así como recomendaciones de carácter general.

El tiempo transcurrido desde la elaboración de este documento, en el que se han aprobado importantes normas en esta materia como la mencionada Ley 9/2017, la cual ha impuesto un cambio de filosofía, la modificación de la jurisprudencia de los tribunales y el criterio de los órganos administrativos de resolución de recursos contractuales respecto de las posibilidades de la contratación pública sostenible, exigen una revisión por especialistas en contratación pública sostenible de sus contenidos para adaptarlos al contexto jurídico y social actual, por lo que se plantea el presente proyecto.

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 5/11
VERIFICACIÓN	Pk2jpmPKDAGBNVXBH5LZVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Objetivos del proyecto

Potenciar la contratación pública sostenible

El objetivo del proyecto es potenciar la contratación pública sostenible en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales pues con ello se aprovecha el considerable volumen de adquisiciones del sector público andaluz—en torno al 20% del PIB – como incentivo para que los operadores económicos orienten sus productos y servicios a la sostenibilidad medioambiental y social.

No se trata, en definitiva, de aumentar el catálogo de conductas prohibidas, sino de direccionar la oferta de productos y servicios del sector privado, alentando una “industria” respetuosa con el medio ambiente y con los derechos de la ciudadanía como personas y como trabajadores y trabajadoras.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, corresponde a la Dirección General de Patrimonio la coordinación en materia de contratación pública de la Junta de Andalucía, por lo que el objetivo del proyecto es transversal a toda la organización.

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 6/11
VERIFICACIÓN	Pk2jMPXKDAGBNVBH5LZVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Previsión de resultados

Conceptos generales

Se pretende la revisión y actualización de la anteriormente citada Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía para su adaptación al marco jurídico actual, dotando con ello y tras la oportuna aprobación, a la organización de un instrumento que facilite la movilización de la Administración andaluza para la integración de la perspectiva medioambiental en su día a día.

Dicho trabajo requeriría el estudio del marco jurídico actual, europeo, nacional y autonómico, de las sentencias de órganos judiciales y resoluciones de Tribunales administrativos de contratos relacionadas con las cláusulas sociales y ambientales.

El resultado será un borrador de texto completo de la Guía de cláusulas actualizada distinguiendo si estas cláusulas son propiamente cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas particulares, criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución. Se deberá recoger cláusulas sociales y medioambientales que tengan un carácter transversal que se apliquen a cualquier tipo de contrato. También podrá incluirse una clasificación de estas cláusulas en función de materias concretas como limpieza, seguridad, mantenimiento de edificios administrativos, material y mobiliario de oficina, equipos informáticos, etc...

Asimismo se requiere de una propuesta de clasificación sistematizada y detallada de las cláusulas sociales y medioambientales utilizadas por la Junta de Andalucía.

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 7/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPXKDAGBNVXBH5LVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Potencial aplicación de resultados del proyecto

Junta de Andalucía y sector instrumental

La Dirección General de Patrimonio es la competente en materia de coordinación de la contratación pública de la Junta de Andalucía, por lo que la aplicación de los resultados del proyecto abarca a los procesos de contratación pública de todos los entes que la componen, convirtiéndose la misma en un instrumento estratégico para promover los objetivos de las diferentes políticas, generando una contratación innovadora que logre un crecimiento inteligente, ecológico e integrador que refuerce la economía circular, las posibilidades de los productos y servicios reutilizados, reparados, reelaborados y reacondicionados y las soluciones sostenibles y eficientes desde el punto de vista del uso de los recursos.

La contratación pública sostenible reporta beneficios tanto para las Administraciones públicas como para los ciudadanos y ciudadanas. Para aquéllas, porque mejora la eficiencia en el gasto público mediante el ahorro en políticas ambientales y sociales que compensan la mayor inversión que la contratación pública sostenible generalmente requiere. Para los ciudadanos, porque la puesta en marcha de estas políticas de contratación mejora su calidad de vida al elevar los niveles de protección del entorno natural y las condiciones sociales y laborales de la ciudadanía.

La enorme relevancia que posee actualmente el fenómeno de la contratación pública sostenible se manifiesta, por ejemplo, en su inclusión en la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía (artículos 30 —Contratación pública verde— y 53 —Huella de carbono de productos, servicios y suministros en la contratación pública—).

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 8/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPXKDAGBNVBH5LZVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Herramientas para evaluar los resultados del proyecto

Contenido de la memoria

El objetivo principal de este proyecto es elaborar una nueva Guía de inclusión de cláusulas sociales y medioambientales, en tanto en cuanto, se requiere una revisión de fondo de la existente actualmente, de ahí que el resultado principal sea poner a disposición de todos los órganos de contratación dicho documento.

Para su mejor difusión se propone publicarlo en el Portal Junta de Andalucía, en Temas > Contratación pública > Gestión de la contratación pública > Cláusulas sociales y ambientales.

Por otro lado, se requiere dentro de las tareas del proyecto una propuesta acorde a la nueva Guía de clasificación sistematizada y detallada de las cláusulas sociales y medioambientales, con la intención de que sirva de criterio de búsqueda en el Perfil de Contratante de esta administración¹, siendo este elemento básico de cara a la transparencia.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o por las normas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los órganos de contratación del sector público andaluz difunden, a través de Internet, su perfil de contratante, como se establece en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La intención es que la Junta de Andalucía no solo aplique la Guía e incluya cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos que rigen las licitaciones sino también mejorar la identificación tanto por la ciudadanía como los agentes participantes en la contratación de estas, de manera que sea público y transparente su cumplimiento. Para ello se pretende mejorar la búsqueda a través de los sistemas de información de manera que el propio Perfil de Contratante muestre directamente información de la inserción de cláusulas, habiéndose diseñado ya incluso un buscador por esta categoría.

Finalmente se recoge la elaboración de un informe anual de inserción de cláusulas sociales y medioambientales que se publicará de igual forma en el portal Junta de Andalucía.

¹ Los diferentes órganos de contratación del Sector Público andaluz difunden a través de su perfil de contratante la información, los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 9/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPKXDAGBNVXBH5LVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Descripción del equipo de trabajo implicado en el proyecto

Se requiere de al menos dos técnicos especialistas en contratación pública sostenible para abordar los trabajos de adaptación al contexto jurídico y social actual de la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía”.

El personal del equipo de trabajo dependerá única y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual asumirá la condición de empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho personal, sin que, en ningún caso resulte responsable la Dirección General de Patrimonio de las obligaciones del contratista y sus personas trabajadoras, aún cuando los despidos y medidas que adopten sean como consecuencia, directa o indirecta, del cumplimiento, rescisión o interpretación del contrato.

Los autores del encargo renunciarán a cualquier derecho patrimonial sobre los materiales resultantes del mismo, cuya titularidad corresponderá, única y exclusivamente, a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía. Este órgano está facultado para utilizar el trabajo realizado, en su totalidad o parcialmente. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.

La persona contratista, en su caso, no podrá sustituir a los técnicos especialistas adscritos a la realización de los trabajos, sin la expresa autorización de la administración y será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre protección de datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

La dirección facultativa de los trabajos estará a cargo de la persona que se designe por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, la cual velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en la contratación, verificará que los materiales entregados cumplen las indicaciones contenidas en la misma y certificará la ejecución y conformidad para el abono del trabajo. Corresponden a la dirección facultativa del contrato las funciones siguientes:

- i. Dirigir y supervisar la realización y desarrollo de los trabajos contratados.
- ii. Examinar y aprobar, en su caso, las propuestas presentadas por el adjudicatario para la realización de cada una de las tareas previstas.
- iii. Determinar y hacer cumplir las normas de procedimiento.
- iv. Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del encargo, pudiendo introducir las modificaciones y correcciones oportunas antes del comienzo de la siguiente etapa.

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 10/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPXKDAGBNVBH5LVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Presupuesto y plazo de ejecución

El presupuesto estimado del proyecto descrito en la presente Memoria asciende a la cantidad de 18.900 euros (dieciocho mil novecientos euros), IVA excluido.

El plazo para ejecutar el proyecto se estima en tres meses, debiendo quedar finalizado en cualquier caso antes del 30 de diciembre de 2020.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO

Myriam del Campo Sánchez

FIRMADO POR	MYRIAM DEL CAMPO SANCHEZ	13/07/2020	PÁGINA 11/11
VERIFICACIÓN	Pk2jmPXKDAGBNVXBH5LZVHAZV68DAF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	